

Sección latinoamericana

EL SALVADOR

País de la sonrisa y también del rictus

El cotidiano de Londres *The Financial Times*, y *El Sol de México* publicaron en los primeros días de septiembre un artículo del corresponsal londinense en Latinoamérica, Alan Riding, sobre la actual situación del más pequeño país centroamericano, El Salvador, que con sólo 20 935 km² tiene una población de 3 942 000 habitantes (dato de 1974). En los últimos años este país ha ocupado las columnas de los grandes rotativos internacionales por acontecimientos tan disímiles como la guerra contra su vecina Honduras, en 1970, el pasado concurso de belleza de la Miss Universo,

julio de este año, y los sistemáticos asesinatos de campesinos, estudiantes y líderes obreros.

Alan Riding comenta en su artículo que "Los diplomáticos extranjeros están especulando que [el presidente] Molina, quizá sea remplazado pronto". Hay un amplio descontento en contra del coronel Arturo Armando Molina, quien ascendió a la primera magistratura de su país gracias a unas fraudulentas elecciones realizadas en 1972. En esos comicios la coalición de centro izquierda, Unión Nacional de Oposición (UNO), obtuvo una amplia victoria electoral con el candidato demócrata cristiano, Napoleón Duarte.

El malestar popular en contra del gobernante es una expresión de tradicional inconformidad con un sistema en el que las célebres "14 familias" monopolizan la propiedad de la tierra, de la producción agropecuaria y de la exportación de café, algodón y azúcar, con el apoyo ininterrumpido de regímenes militares incapaces de aplicar las más tibias reformas como las del tipo de la Alianza para el Progreso. Sin embargo, lo distintivo de la nueva situación es que han

surgido nuevas áreas de conflicto, originadas por el hecho de que el crecimiento económico del país ha generado nuevos grupos sociales de importancia económica-política que tienden a dar dinamismo a la vida salvadoreña. Aprovechando las ventajas del Mercado Común Centroamericano, se creó un sector industrial que en 1973 participaba con el 19% del producto interno bruto (PIB), frente a un sector agropecuario que producía el 25% de ese total. La vieja oligarquía agroexportadora y la nueva burguesía ligada a la industria y los servicios, constituyen con el ejército polos de poder con intereses diferentes.

Al descontento popular se une hoy un equilibrio inestable entre los sectores económicamente poderosos, que han entrado en conflicto con el coronel Molina, ya que su gobierno, para cobrar autoridad, recurre indistintamente a medidas que favorecen y afectan a estos grupos. Por ejemplo, para los sectores industriales la apertura hacia el mercado centroamericano implica mejores posibilidades de expansión, en tanto que para la oligarquía terrateniente aquello representa mayor competencia con productores de bienes iguales o similares. En

Las informaciones que se reproducen en esta sección son resúmenes de noticias aparecidas en diversas publicaciones nacionales y extranjeras y no proceden originalmente del *Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A.*, sino en los casos en que así se manifieste.

tanto un sector, el moderno, se inclina por las reformas limitadas que estabilicen la situación interna, la oligarquía es contraria a todo tipo de reformas que pongan en peligro sus bases de poder, sobre todo porque las demandas populares reclaman la aplicación inmediata de una reforma agraria, así como ayuda para los agricultores pequeños y medianos; éstos carecen de un eficaz respaldo crediticio, que se otorga con preferencia al sector exportador altamente concentrado.

Para Ríding, el posible cambio puede provenir de los sectores militares y terratenientes ultraconservadores, para quienes resultan irritantes aun las reformas limitadas. Tal es el caso de la creación del Instituto Salvadoreño de Transformación Agraria (ISTA), cuya tímida Ley fue protestada por la oligarquía, la cual impuso una serie de reformas a su articulado con las que la transformación de la gran propiedad agraria tardará, en caso de realizarse, entre 100 y 200 años, de acuerdo con la declaración del Partido Demócrata Cristiano.

Sin embargo, el peligro real de un posible golpe no surge porque la política del presidente Arturo Armando Molina amenace con su orientación represiva a los intereses directos de la oligarquía y de los grupos a ella ligados; el problema radica fundamentalmente en la falta de una política adecuada para responder a las graves necesidades del país, lo que provoca cada vez mayor malestar político que ha encontrado canales de expresión con creciente capacidad para constituirse en una posibilidad de poder.

En los últimos meses, las respuestas gubernamentales al creciente malestar popular se concentraron en buscar salidas limitadas como la del ISTA. Este se concretará a desarrollar proyectos de transformación agraria en algunas zonas en las que se construirán obras de infraestructura, carreteras, vías de acceso, viviendas, etc.; estas obras se entregarán a los campesinos en un proceso excesivamente lento y burocrático. El Congreso, a iniciativa del Partido de Conciliación Nacional (PCN) creado por los militares y la oligarquía, estableció en el artículo 35 de la citada Ley, que hasta no estar sustancialmente terminado un proyecto de transformación, no podría iniciarse otro, los diputados oficialistas evitaron, de acuerdo con el proyecto original, que el Ejecutivo pudiera decretar simultá-

neamente las áreas de transformación agraria. Otras medidas aplicadas por la actual administración, con respaldo internacional, fueron la creación de dos áreas de riego en los distritos de Zapotitlán y Atiocoyo, así como la edificación de la presa sobre el río Lempa.

Esas medidas, así como otras de vivienda popular, modernización de la administración pública y creación de instituciones previstas en el Plan de Desarrollo 1973-1977, resultan de tan lenta aplicación y de tan corto alcance, que en lugar de disminuir la presión de la caldera social tienden a elevarla.

A la falta de una política de transformaciones se agregan frecuentes problemas de corrupción administrativa y de sistemática violencia contra la población; tan sólo en los últimos doce meses, en los poblados de La Cayetana y Tres Calles, la temible Guardia Nacional asesinó impunemente a varias familias campesinas; el 30 de julio último, las fuerzas de seguridad dispararon en contra de una manifestación estudiantil, causando numerosos muertos y heridos, y el 27 de septiembre fue asesinado por una banda paramilitar el diputado nacional, Rafael Aguinada Carranza, líder de la Federación Unitaria Sindical de El Salvador (FUSS) y uno de los más reconocidos dirigentes políticos de la oposición salvadoreña; el crimen cometido por las llamadas Fuerzas Armadas de Liberación Anticomunista y Guerra de Eliminación (FALANGE) repite el conocido expediente aplicado en Guatemala, Argentina y Brasil, en donde la Mano Blanca, la AAA y el Escuadrón de la Muerte, respectivamente, asesinan a los patriotas que no pueden ser sobornados o eliminados por vías legales.

De acuerdo con Alan Ríding:

El empeoramiento de las condiciones de vida que privan en el campo, ha obligado a la Iglesia católica a la adopción de una postura cada vez más crítica, en forma abierta, del gobierno.

"No es ningún secreto que aquí existe un clima de violencia, de represión, de falta de respeto hacia los derechos humanos fundamentales", señaló el mes pasado la Conferencia Episcopal Salvadoreña. "Sin duda, la razón principal de esta violencia y de esta inseguridad, es la injusticia que sufre la mayor parte de la población."

En su última carta pastoral, el arzobispo de San Salvador, Luis Chávez y González, señaló que "las mejores tierras están dedicadas al café, al algodón y a la caña de azúcar, todo para exportación, mientras que sólo aquellos terrenos que son los peores, sirven para proporcionar a los salvadoreños el pan de cada día".

Indicó que el 92.1% de los niños en edad preescolar sufren desnutrición, mientras que sólo el 33% de los hombres tienen empleo durante todo el año. "La gente se vuelve cada vez más pobre", continuó, "Hay hambre hoy en día en El Salvador."

Hasta aquí la cita de Alan Ríding.

La actual situación se ha complicado más aún debido a que el calendario político de El Salvador establece que en marzo de 1976 deben celebrarse las elecciones legislativas y de ayuntamientos, y en 1977 los comicios presidenciales. En los tres años de gestión el coronel Molina no logró disolver la oposición, sino por el contrario ésta se ha mantenido viva y actuante, aprovechando todos los resquicios legales para denunciar los actos oficiales y para promover en todos los niveles, parlamentarios y extraparlamentarios, las demandas de la población. En esta situación, hablar de elecciones para el próximo año significa para las fuerzas en el poder remover un conflicto de difícil solución, ya que carece de la suficiente base social para obtener la mayoría y de la necesaria homogeneidad para luchar por ella. De ahí que las "14 familias" y los mandos militares piensen en la necesidad de sustituir al Gobierno por medio de un golpe de Estado desde el interior del propio ejército.

Sin embargo, existen otras posibilidades a las que parece orientarse el propio Gobierno. Así, se plantea, de acuerdo con proyectos expuestos por personeros políticos de la derecha, una reforma constitucional que evite las elecciones programadas y al mismo tiempo conduzca a un Estado corporativo. En efecto, ante el peligro electoral "... la economía del país va a sufrir con ello, y si todo coincide con un desbalance en la situación económica mundial, tendremos todo muy a propósito para que los grupos de la subversión se aprovechen de la toma de posiciones clave, encaminando al país a un desastre no sólo material, sino más bien institucional", opinó *El Diario de Hoy*, de San Salvador, en

su edición del 4 de septiembre de 1975. Ante tales consideraciones por demás reveladoras del temor de una victoria popular, los políticos oficiales propugnan reforzar la estructura estatal eliminando los mecanismos de la democracia representativa, para sustituirlos por un Estado fuerte, muy al gusto de las oligarquías y los militares.

Uno de los más claros expositores de ese proyecto declaró al mismo periódico que "En El Salvador ya no podemos darnos el lujo de una democracia formal y representativa, a la usanza clásica. Creer que cada dos años soportaremos luchas de lacciones electorales es una grave error, que de no repararlo traerá al final la desarticulación del orden social existente, así como la destrucción del naciente desarrollo económico". Estas ideas forman parte de una tendencia que aconseja la supresión de los partidos políticos y la creación de uno solo, el Movimiento Nacional Salvadoreño; la sustitución de la Asamblea Legislativa, deliberativa, y expresión política de partidos y clases, por una Asamblea Colegiada integrada por corporaciones; la Presidencia de la República sería nombrada por la Asamblea Colegiada, al igual que el Poder Judicial, etcétera.

Este proyecto corporativo, de típico corte fascista y estilo musolinesco, busca así, en nombre del naciente desarrollo económico, la eliminación de la "democracia formal" sustentada en la soberanía popular, para sustituirla por el poder abierto de la oligarquía. Parece inconcebible que en esta época se pueda hablar de este tipo de proyectos políticos; sin embargo, la práctica histórica muestra cómo frente a crisis profundas que amenazan el poder absoluto, se recurre a las peores formas de autoritarismo, que en América Latina tienen expresiones locales denominadas por algunos sociólogos como "colonial-fascismo".

Para aplicar ese proyecto, el Partido de Conciliación Nacional, en el Gobierno, cuenta en el Congreso con los votos suficientes para reformar la Constitución; sin embargo, un proyecto fascista requiere de otros elementos, con los que no cuenta esa tendencia; entre ellos cabe destacar que todo proyecto político fascista verdadero se apoya en una base social amplia a la que manipula y con la que aplasta las resistencias y tiene un proyecto histórico-político que atrae a los sectores atrasados. Estas dos condiciones son las que permiten al Estado

fascista una verdadera vigencia; de otra manera el colonial-fascismo se reduce a formas fascistas, y de ellas, sólo a aquellas más abiertamente terroristas y reaccionarias.

Existe otro expediente de permanente vigencia para los regímenes militares centroamericanos: el de las guerras localizadas por conflictos fronterizos, como la llamada "guerra de las 100 horas" o "del fútbol" en la que se enfrentaron tropas de El Salvador y Honduras. Este conflicto, que ha paralizado el proceso de integración de Centroamérica, no ha sido resuelto aún; a pesar de las negociaciones no se ha llegado a un acuerdo de paz definitiva, de tal manera que la herida permanece abierta y lista para ser utilizada con otros propósitos muy distintos al de la defensa de la soberanía nacional. El conflicto con Honduras tiene visas de representar una salida temporal para los grupos en el poder pues puede ser controlable; además resulta necesario porque el ejemplo hondureño de reformas limitadas, como la Reforma Agraria, tiende a elevar la conciencia popular en El Salvador. En este sentido, las recientes movilizaciones de tropas a la frontera con Honduras buscan mantener un clima de tensión regional que justifique otra posibilidad en caso de que el proyecto corporativo fracase.

El Partido Unión Democrática Nacionalista (UDN), miembro del UNO, evaluó de la siguiente manera los tres años del actual Gobierno: "Este período ha significado un fracaso del esquema económico trazado por el Gobierno que preside el coronel Molina.

"La normalización del Mercado Común Centroamericano no se ha logrado todavía pese a los esfuerzos realizados en ese sentido; las medidas reformistas principales contenidas en el Plan de Desarrollo de la Nación 1973-1977 no se han puesto en práctica, con excepción de algunos proyectos que en la mayoría de los casos han sido mediatizados o inutilizados por la oligarquía; algunos, incluso, dictados en su propio beneficio.

"La creación de la Junta Monetaria —continúa el UDN—, el establecimiento de las Zonas Francas, la formación del FIGAPE y del Fondo Social para la vivienda, en poco o en nada han beneficiado al pueblo y no han constituido ninguna solución ni salida a la crisis económica que sufre el país."

Por su parte, el semanario *Voz Popular*, de San Salvador, describe así la situación: "a la crisis crónica en la estructura económica del país (monopolio privado sobre la tierra, injusta distribución de la riqueza nacional, proceso de industrialización y desarrollo agropecuario en función del mercado externo, el subdesarrollo y la dependencia, entre otros) se unieron, agravándola, los efectos del proceso inflacionario, la crisis energética y la recesión económica que afecta al mundo".

PERU

Cambios en el gobierno; nuevo Presidente

El viernes 29 de agosto último, el general Juan Velasco Alvarado fue relevado del cargo de presidente de la República, por decisión unánime de los comandantes de las cinco zonas militares del país, respaldados por los demás jefes de las instituciones armadas y fuerzas policíacas de Perú. El nuevo presidente del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas del Perú es el también general Francisco Morales Bermúdez, hasta esa fecha primer ministro.

En la declaración de los comandantes militares, formulada desde la ciudad de Tacna, cercana a la frontera con Chile, se dan a conocer las causas del cambio de Jefe de Estado: "...Los peruanos que deseamos una patria libre, en que se realicen tanto los individuos como personas, así como la sociedad peruana en pleno, nos pronunciamos revolucionariamente para eliminar los personalismos y las desviaciones de nuestro proceso, que se vienen sufriendo por quienes se equivocaron y no valoraron el exacto sentir revolucionario de todos los peruanos".

Los mandos militares señalan en su documento que "Confiamos en que la dirección que el general de división Francisco Morales Bermúdez, imprima al nuevo Gobierno peruano, concrete las justas aspiraciones del pueblo, las fuerzas armadas y las fuerzas policíacas del Perú".

La unanimidad de la decisión en los cuadros con mando directo en el ejército y demás ramas militares, permitió que "el relevo" tuviese un carácter pacífico e

inmediato. El general Juan Velasco Alvarado, enterado en Lima de la decisión de sus compañeros de armas, emitió por la red nacional de radio y televisión un breve mensaje en el que afirmó: “al alejarme de la conducción del proceso revolucionario, responsabilidad que asumí el 3 de octubre de 1968, lo hago con la íntima satisfacción del deber cumplido y haber sentado las bases del nuevo Perú”.

El hasta entonces Presidente agregó: “Como gestor y conductor de la Revolución peruana, agradezco al pueblo de mi patria, a la fuerza armada y fuerzas policiales el apoyo brindado en esta difícil tarea de transformar nuestra sociedad y pido, a todos los hombres y mujeres del Perú, con uniforme o sin él, mantenerse siempre unidos y dar todo el apoyo que requiere la continuidad del proceso revolucionario. ¡Viva el Perú! ¡Viva la Revolución!”

La sorprendente noticia generó de inmediato reacciones distintas y contradictorias entre la opinión pública. En esos días se realizaba en Lima la V Reunión de Cancilleres de los Países No Alineados, que inauguró sus trabajos con la presencia del general Velasco Alvarado; en el transcurso de una de las sesiones se informó de la sustitución y poco más tarde el canciller peruano, Miguel Ángel de la Flor, presidente de la Conferencia, anunció a los participantes el cambio presidencial. Los comentaristas peruanos y extranjeros encargados de cubrir la información sobre la V Reunión, concordaron en apreciar que el relevo fue planeado con anterioridad para hacerlo coincidir con la celebración del gran foro de las naciones no alineadas, de tal forma que en el seno de ese movimiento no quedase duda alguna del carácter avanzado del cambio gubernamental. Tocó más tarde al nuevo Presidente clausurar los trabajos de la Conferencia, en la que se ratificó la posición “tercermundista y de no alineamiento de la Revolución peruana, y el compromiso de su fuerza armada en su indismayable política contra la dependencia o el sometimiento a intereses extranjeros. . . La Revolución que hoy los despierta es la misma que hace unos días los recibió con fraterno abrazo. . . El camino que sigue un pueblo en busca de la justicia y la libertad con una ideología que él mismo formula, no se modifica aunque hay cambios en la conducción, porque todos nos encontramos imbuidos del mismo ideal.

”La posición irreversible del Perú como país no alineado y tercermundista se mantendrá más firme que nunca para proseguir la lucha en que están empeñados nuestros pueblos”. La declaración del nuevo Presidente de Perú permitió despejar las incógnitas que todo cambio sorpresivo genera en la opinión mundial.

Un día antes, en la ciudad de Tacna, Morales Bermúdez había declarado que el cambio presidencial permitiría continuar con los principios y normas que dieron vida al movimiento de las fuerzas armadas en octubre de 1968, que respecto a esos principios “nada va a cambiar un solo milímetro”, y que los cambios se harán “en los procedimientos, en el manejo y en la conducción política del proceso revolucionario”.

En los grupos nacionales la respuesta fue contradictoria: en las zonas elegantes y ricas de Lima, sus habitantes celebraron la caída del “cholo”, calificación despectiva que usan para llamar al ex presidente Velasco Alvarado; esos grupos burgueses consideraron que su sustitución por el general Morales Bermúdez, nieto de un ex Presidente de Perú, cristiano y moderado en su conducta, les permitiría volver al ejercicio del poder del que fueron desalojados siete años antes. En esa línea, el influyente *The New York Times* dijo el 30 de agosto: “. . .es un revés para esas fuerzas que luchan por una revolución más drástica y más rápida”, y agregó que el nuevo gobierno “se concentrará en la consolidación de las reformas en ejecución antes de emprender aventuras dudosas”. Otros comentaristas pro norteamericanos, como Eudocio Ravines, no dejaron de manifestar su contento, esperando con cautela los deseados cambios políticos.

Por su parte, las fuerzas democráticas de Perú, que en los últimos meses llamaron repetidamente la atención respecto a actos represivos del Gobierno, señalaron su posición de respaldo a los cambios. La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP), la más importante organización obrera del país, declaró: “lo fundamental en nuestro país consiste en mantener, desarrollar y profundizar el proceso revolucionario que se inició el 3 de octubre de 1968. Tal ha sido la línea general desplegada por las fuerzas más avanzadas de la sociedad, por el equipo militar revolucionario y por las organizaciones sindicales, sociales, conscientes y

patrióticas. Tal, también, la decisión anunciada por el general Francisco Morales Bermúdez al asumir la jefatura de la Revolución peruana y la Presidencia de la República. . . Cualquier cambio de hombres en la cúspide del poder se justifica para avanzar, para desplegar más y mejor las banderas de lucha antiimperialista y liberadora de nuestra patria, para derrotar a los enemigos del pueblo y para superar las dificultades que atraviesa nuestro país”. Al llamar a respaldar al nuevo gobierno, la CGTP señaló que “tal decisión no tiene nada de común y es contraria a las maniobras reaccionarias destinadas a hacer retroceder la historia e instaurar en nuestra patria una dictadura fascista. Ahora más que nunca urge reforzar la unidad de las fuerzas armadas y la vinculación más estrecha entre el pueblo y la nueva conducción militar, con el mejor propósito progresista y liberador”.

La CGTP definió en su llamamiento lo que consideró como las principales tareas del momento: “. . .ahora resulta indispensable marchar al reordenamiento de la vida nacional, a una profunda transformación administrativa, a la superación de los vicios, la corrupción, las medidas intimidatorias y agresivas, las que se gestaron peligrosamente en el pasado contra la voluntad de nuestro pueblo”.

Por su parte, el Comité de Coordinación de Organizaciones Populares (COCOP), que agrupa a las principales organizaciones de masas (obreras, campesinas, populares, etc.), surgido después del 5 de febrero último para defender y organizar el avance de la Revolución amenazada,¹ llamó en su comunicado a “mostrar serenidad y decidido apoyo revolucionario a la presencia del nuevo mando del Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas, para lograr la profundización de la línea patriótica y antiimperialista y la liquidación de la corrupción administrativa, del arrabismo, del oportunismo y de la opresión antipopular, que pretendieron desvirtuar los objetivos del proceso iniciado el 3 de octubre de 1968”.

Por su parte, el Partido Comunista peruano (PCP), que ese mes de agosto polemizó públicamente con el régimen respecto a distintas medidas represivas

1 Véase “Perú: Intentona motinera y evolución económica reciente”, en *Comercio Exterior*, México, febrero de 1975, pp. 172-174.

en contra de la izquierda, señaló "Que los cambios producidos en la Presidencia de la República y en el Gabinete Ministerial son sustanciales en razón de que ellos tienen la finalidad de fortalecer y profundizar la Revolución peruana y eliminar las desviaciones y errores de conducción que dificultaba el apoyo popular en los últimos meses".

En el documento, el PCP expresa su punto de vista sobre el futuro inmediato: "...en esta nueva etapa que se abre en el proceso transformador, se consolida y profundiza el cauce antiimperialista y antioligárquico del mismo y que las conquistas de la Revolución se harán irreversibles con la mayor participación popular organizada, democrática y sin manipuleos ni infiltraciones contrarrevolucionarias. Esto hará cada vez más invencible y férreo el binomio pueblo-fuerza armada".

El respaldo de las organizaciones de izquierda al gobierno del general Morales Bermúdez representó en el vasto marco popular la única manifestación pública de apoyo político no oficializado, lo cual, y pese a su dimensión, tiene un gran significado político para un país en el que las grandes masas populares poco participan, como resultado de una historia en la que la oligarquía terrateniente las mantuvo fuera del escenario político por medio de la violencia armada, institucional y cultural. Esa debilidad sustancial de la vida política, la falta de participación de las masas, es la que permite en Perú que todos los cambios se realicen en la cúspide del sistema político sin intervención de las masas; lo que también explica la debilidad final del ex presidente Velasco Alvarado, quien de ser con mucho la figura militar y política más importante del país en muchos años, cayó desde su alto sitio ante la presión de la oficialidad que calificó de personalista a su gobierno.

Este cambio en Perú corre el riesgo de ser unilateralmente caracterizado como un problema de personalidades; esto, aunque falso, sirve para deformar la apreciación del carácter real de los acontecimientos, pues permite pensar que una vez retirado el ex Presidente las cosas han vuelto a su lugar. En la escena peruana nada de eso ocurre; la salida del general Velasco Alvarado, igual que los motines del 5 de febrero último, no son sino expresiones de agudas dificultades que encuentran salidas dramáticas y parciales en ese tipo de acontecimientos.

Las transformaciones de los últimos siete años son históricas; nunca, ni en tan poco tiempo, Perú vivió un proceso de cambios tan importante. Las fuerzas armadas minaron el poder de la vieja oligarquía nacional y se enfrentaron al imperialismo en terrenos en los que históricamente estuvo asentado.

Al liquidar las bases de sustentación de la oligarquía terrateniente e intermedia, las fuerzas armadas lograron transformar las ancestrales relaciones de producción que trababan el desarrollo del país. Una rápida reforma agraria redistribuyó el 85% de la tierra laborable en sólo 7 años y se estima que culminará su fase distributiva el próximo año. La ocupación de la banca fue otra de las medidas importantes con las que se eliminó al viejo grupo gobernante, al cual se le privó además del monopolio de la información al nacionalizarse los diarios, primero, y transferirlos, después, a las organizaciones sociales. Al mismo tiempo, la recuperación de los recursos naturales del país: petróleo, pesca, minería, y de una muy importante parte de la industria de transformación, de manos del capital monopolista norteamericano, permitió a Perú establecer las bases de un nuevo desarrollo económico-social. Las tradicionales alianzas de clase sufrieron un cambio radical, ya que el nuevo bloque gobernante es expresión de la hegemonía de los militares que han encontrado bases de entendimiento con los nuevos grupos industriales y el capital monopolista extranjero, dentro de las normas que establece el Estado.

El sector económico estatal, surgido con las nacionalizaciones, y las nuevas relaciones agrarias, constituyen novedades en la economía peruana que apoyan el poder político de los militares, quienes mantienen relaciones de cooperación con el capital extranjero bajo nuevas reglas de juego. El capitalista foráneo puede invertir sólo en aquellos sectores, fundamentalmente los industriales, en los que el Estado no cuenta con la capacidad necesaria para desarrollarlos de manera independiente.

En estos casos se recurre al respaldo financiero multilateral, a la creación de empresas mixtas, etc. En este terreno, la burguesía industrial de Perú cuenta con un amplio campo de acción en el que puede desarrollarse bajo la protección del régimen de las fuerzas armadas.

La modernización del país y su cre-

ciente independencia del exterior hicieron que el movimiento obrero y campesino organizado, los intelectuales avanzados, etc., respaldasen la acción del gobierno, quien después de la toma del poder dejó de reprimir violentamente a las masas, para emprender tareas en las que coincidieron con las aspiraciones de éstas. Esta confluencia de objetivos, al enfrentarse a un enemigo común, permitió una alianza tácita entre el pueblo y las fuerzas armadas de Perú, alianza que nada tiene de idílica, pues los militares paternalistas manipularon a la población, temerosos de que escapara de su control y porque el propio movimiento de masas es aún débil. Esto es resultado orgánico del bajo nivel de desarrollo del país en lo ideológico, por las limitaciones históricas y por la presencia de concepciones ultraizquierdistas que dividen el campo popular, sobre todo entre los estudiantes.

La dirección militar apela al respaldo de la población, pero con la exigencia de un apoyo absoluto, dependiente, vertical, tal y como ocurre con el respaldo que la disciplina militar exige a los soldados respecto a los jefes. Este tipo de limitaciones orgánico-ideológicas, la idea de que la revolución se hace para el pueblo y no con el pueblo y por el pueblo, condujo durante todos estos años a permanentes choques entre las partes constituyentes de la alianza, ya que las medidas de cambio socioeconómico pusieron en movimiento a los trabajadores urbanos y rurales, quienes promoviendo sus propias reivindicaciones participan en un proceso limitado por las concepciones desarrollistas de los generales. Esta contradictoria unidad pudo marchar sin mayores dificultades durante la primera etapa del proceso, en la que las metas inmediatas eran destruir las bases económicas de la oligarquía y obtener la soberanía sobre las riquezas nacionales. En este sentido, las tareas del Plan Inca —programa secreto de transformaciones democrático-burguesas del ejército— se han cumplido. Ahora se abren nuevas fases de desarrollo para el país, ante las que los distintos componentes del torrente revolucionario comenzaron a discrepar, primero en voz baja y después de manera abierta; de ahí que en este período se hayan presentado agudas tensiones políticas, de las que son testimonio los acontecimientos del 5 de febrero y el actual cambio de gobierno.

Desde mediados del decenio de los sesenta, la difícil situación económica de

Perú, uno de los países más atrasados de Latinoamérica, condicionó que el descontento popular se enfrentara a la vieja dictadura oligárquica, unas veces con dirección civil, otras directamente militar. En esos años, el malestar campesino fue interpretado por pequeños grupos intelectuales como un síntoma de la presencia de una situación transformable en estallido revolucionario. Convencidos de estas posibilidades, aquellos grupos emprendieron el camino de una guerra de guerrillas para transformar el descontento en revolución. Pronto fueron derrotados por un ejército mejor preparado. Este, finalmente, fue influenciado por la acción de los grupos guerrilleros e, igual que en otros países, los cuadros militares llegaron a la conclusión de que quien engendra los movimientos armados no es una inexistente conspiración internacional, sino el propio subdesarrollo. En esas condiciones, los militares adoptaron el papel de gestores del desarrollo dependiente y buscaron en el marco de la dominación eliminar los factores que condicionan la explotación popular; dicho criterio contrarrevolucionario y desarrollista forma parte de programas como el de la Alianza para el Progreso, que condujeron al enfrentamiento de los ejércitos con las viejas oligarquías asentadas en América Latina.

El ejército peruano, una vez que derrotó al descontento guerrillero y ante la ausencia de una clase social que desde el poder tradicional impulsara las tareas desarrollistas, tomó directamente el mando derrocando al presidente Fernando Belaúnde Terry, el 3 de octubre de 1968. Esa ocupación del poder fue planeada desde el Centro de Altos Estudios Militares (CAEM), en el cual un grupo de coroneles jóvenes formularon un plan de reformas socioeconómicas para Perú. Convencidos de que los políticos reformistas carecían de capacidad para sacar a la nación del atraso, persuadieron al jefe del Ejército, general Juan Velasco Alvarado, de que había la oportunidad de emprender un proyecto reformista. Aquel 3 de octubre los tanques ocuparon la capital y se expulsó al presidente Fernando Belaúnde Terry, quien había demostrado la incapacidad de las palabras para transformar al antiguo país incaico.

Al principio la población no se superó del carácter nuevo de ese golpe; sin embargo, las primeras medidas en defensa del petróleo en manos de la empresa norteamericana International Petroleum

Company (IPC), condujo a que los sectores avanzados de la sociedad peruana respondieran solidariamente con una ideología nacionalista, antiimperialista y antioligárquica. Las fuerzas armadas impulsaron cambios que generaban resistencias entre los sectores sociales afectados, los cuales respondieron con apoyo norteamericano e intentaron con la marina emprender aventuras que fueron neutralizadas con oportunidad. En este proceso, la personalidad del líder militar y Presidente del país, creció notablemente; su origen campesino y humilde le permitió identificarse fácilmente con la población trabajadora; sus acciones, consecuentes con el programa nacionalista, lo consolidaron como el dirigente fundamental de la llamada Revolución peruana.

En el ejército, la unidad militar está garantizada por el respeto a las normas de una disciplina vertical que permite la movilidad de los mandos, y, llegado el momento de retiro, facilitan el ascenso de los grados inferiores. Ese mecanismo de promoción socio-política, unitaria y disciplinada, permite que lleguen al poder jefes de distintas ideologías quienes aplican su propia y peculiar concepción de los acontecimientos y metas sociales. De esa forma, la promoción de los mandos y su cada vez mayor participación en responsabilidades económicas, sin control social y sin la participación de las masas trabajadoras, dio lugar a que surgieran fenómenos de corrupción en la gestión de las empresas estatales y tendencias a impedir de manera creciente la crítica y el movimiento independiente de las masas.

A estas desviaciones en el desarrollo político-económico se agregó la difícil enfermedad del presidente Juan Velasco Alvarado, quien en 1972 sufrió la amputación de una pierna y más tarde arterioesclerosis, lo que le restó una gran capacidad de trabajo, haciendo que su papel como centro de los equilibrios militares disminuyera, al mismo tiempo que perdió contacto con la realidad y las necesidades cotidianas de las masas. Diversos comentaristas señalan que este factor personal, unido a la corrupción entre los administradores estatales, incrementaba las tendencias conservadoras en algunos mandos, quienes comenzaron a manifestar tendencias muy retardatarias en defensa de la situación alcanzada. Esto condicionó el estallido de las contradicciones sociales, antes limitadas por el proceso ascendente de la revolución.

Las respuestas del gobierno a distintos problemas planteados por las masas empezaron a perder elasticidad. En el campo laboral las acciones de los obreros en demanda de salarios, así como el rechazo a las distintas formas de mediatización económica, como son las llamadas empresas de comunidad industrial, fueron calificados de provocadores; también fueron condenadas las huelgas; se crearon mecanismos de división y bandas, que amparadas con la protección gubernamental, intentaron reprimir al movimiento clasista; de la misma manera fueron reprimidas las opiniones críticas de intelectuales que, sin ser enemigos de la Revolución, analizaban sus debilidades y buscaban mantener una política propia.

Esas respuestas represivas tenían origen en el grupo de ministros que rodeaban al Presidente, quien limitado físicamente para relacionarse con el pueblo, aceptaba como válidas las fórmulas presentadas por el grupo "Misión", en el que existían tendencias demócrata-cristianas de tono derechista y cuyos principales representantes eran los ministros de Pesquería, general Javier Tantaleán Vanini; el del Interior, Pedro Richter Prada; el de Información, general Eduardo Segura, y el de Industrias; también estaba en el grupo Héctor Cornejo Chávez, cuñado del ex presidente, ex senador demócrata cristiano y director del principal diario limeño, *El Comercio*. Estos aplicaron una política represiva y divisionista del movimiento popular, con una clara concepción corporativista orientada a desmovilizar a la población para manipularla e impedir su participación en la vida pública.

Esa política personalista y corrupta ponía en peligro a la Revolución, cuyas dificultades reales en lo económico y político eran ocultadas de tal forma que las protestas de los trabajadores aparecían como actitudes provocadoras o contrarrevolucionarias. Los recursos estatales eran utilizados para controlar y corromper a los trabajadores; las bandas de corte fascista reprimían al movimiento independiente y se expulsaba a los dirigentes democráticos. Los últimos acontecimientos que mostraron lo negativo de esas medidas fueron la clausura de la revista *Marka* y la expulsión de 28 dirigentes políticos, entre ellos el notable novelista uruguayo Mario Benedetti, refugiado en aquel país.

Los comandantes de las fuerzas armadas, recogiendo la inquietud respecto a la situación que amenazaba con dividir a los impulsores del proceso peruano, decidieron el relevo del Jefe de Estado, medida ésta considerada por distintos estudiosos como un contragolpe para limitar los efectos de la derecha en el seno de las propias fuerzas armadas.

El semanario limeño *Unidad* describió así la situación: "Para todos los revolucionarios era muy evidente que en los últimos meses se había desarrollado una política desacorde con los postulados de la Revolución. . . Tal desviación se manifestó en la implementación de una política de fuertes vicios macartistas, odiosamente discriminatoria, que llegaba a los extremos de considerar en un mismo plano de igualdad a los amigos y a los enemigos del proceso revolucionario.

"En el plan interno --continúa *Unidad*-- funcionaban un conjunto de medidas administrativas provenientes de diferentes lugares del aparato estatal, que no se detenían en la creación de organismos paramilitares como el Movimiento Laboral Revolucionario (MLR), fascistoide y fuertemente infiltrado por el APRA, interferían fuertemente en la vida de las organizaciones populares obteniendo, por sus odiosos métodos, la repulsa de lo mayoritariamente sano de los trabajadores y de todo el pueblo. Ese mismo origen tenía la manipulación que se materializaba en los sindicatos, como el de Marconada y el de Pilsen, en donde se llegó al colmo de ocupar con la fuerza policial los locales sede. Algo inaudito es también lo acontecido con la Confederación Nacional de Comunidades Industriales (CONACI), maniobra típica del cúmulo de acciones divisionistas promovidas desde el propio aparato estatal, para tener escindidos a los trabajadores y perjudicar el respaldo de grandes sectores de nuestro pueblo al proceso revolucionario. . . No es menos grave la política intimidatoria aplicada contra la intelectualidad progresista que sufrió también los efectos de un irracional, aunque velado macartismo, y fue desalojada de sus puestos de combate al servicio de la Revolución."

Los párrafos anteriores describen la conducta del grupo separado del poder, el 29 de agosto, por decisión de las fuerzas armadas, cuyo gobierno emprendió varias medidas de rectificación, entre ellas:

- Remoción de sus cargos de los ministros involucrados en esa política.

- Designación de un nuevo gobierno en el que participan los ex coroneles que formularon en 1968 el Plan Inca y demás documentos normativos del régimen militar. Los hoy generales Jorge Fernández Maldonado, antes ministro de Energía y Minas y ahora jefe del Estado Mayor del Ejército, puesto desde el cual pasará a sustituir al nuevo primer ministro, general Vargas Prieto, cuando éste pase al retiro el próximo 3 de diciembre.

El general Leónidas Rodríguez, comandante de la Segunda Zona Militar del país, con sede en Lima, es ahora nuevo jefe de la Oficina Nacional de Informaciones; este general sigue en el escalafón al general Fernández Maldonado, por lo cual ascenderá a primer ministro cuando el primero se retire.

Los generales Enrique Gallegos y Rafael Hoyos continuarán en los ministerios de Agricultura y Alimentación. Estos cuatro generales fueron los autores del Plan Inca y se les considera como el grupo de mando más comprometido con el proceso peruano.

- El nuevo gabinete cuenta también, y por primera vez en siete años, con un ministro civil, el economista Luis Barua, encargado de Economía y Finanzas; igualmente, por primera vez un general de la policía ocupará un ministerio, lo cual se considera un hecho positivo porque fue precisamente en ese cuerpo donde se manifestaron tendencias motinescas en febrero de este año.

- Otras dos medidas políticas adoptadas por el presidente Francisco Morales Bermúdez fueron levantar las prohibiciones a las publicaciones clausuradas y permitir el retorno de los exiliados.

La reorganización del gobierno de las fuerzas armadas de Perú deja en pie algunos de los problemas fundamentales que dieron origen a las desviaciones y que impidieron la consecuente aplicación de los planes de desarrollo, que no pueden estancarse y en los que se requieren nuevas soluciones que permitan consolidar los gigantescos avances alcanzados por el país. En este sentido, el problema principal radica en que el ejército solo no puede sustituir la acción creadora de las masas, acción que pugna por abrirse paso en medio del paternalismo militar y

la provocación contrarrevolucionaria de los grupos populistas como el APRA.

La última crisis gubernamental es, igual que la de febrero pasado, una llamada de atención en el sentido de que sin los creadores de la historia no hay proceso verdaderamente revolucionario, porque la Revolución es antes que nada producto consciente y organizado de las masas. Ciertamente es que la peruana está lejos de ser una revolución socialista; sin embargo, el nuevo Estado que hoy se construye y en el que los militares mantienen la hegemonía, no podrá avanzar mucho más sin la participación real de las masas, lo que indicará en su momento si la meta de modernización política está cumplida. De otra forma y, como apunta René Zavaleta Mercado, "Velasco sucumbió a la tentación de una verticalidad vulgar y, por consiguiente, era inevitable que su régimen se fuera haciendo cada día más represivo. . . el proyecto militar era ya un proyecto que sólo podría sobrevivir cortando a uno de sus miembros (y no el menos importante JVA), un régimen que ya necesitaba dividirse para seguir viviendo. Por eso mismo, la democratización de la vida de las masas resulta para Morales Bermúdez, fruto ya de una escisión (progresista o no), una necesidad aún más dramática de lo que fue para Velasco, en cualquier época de su gobierno. Significa que el tiempo de la verticalidad unánime ha concluido y que las clases expresarán sus luchas en el poder en un sentido o en el otro. No importa para ello cuál sea la intención con que llegue Morales Bermúdez sino las condiciones en que deba concretar su intención. Las cosas, por tanto, no han hecho más que empezar. . ."

Las últimas declaraciones gubernamentales parecen recoger la preocupación de sus críticos. En distintas intervenciones públicas, el nuevo Presidente ha insistido en que los cambios estructurales deben estar acompañados de una nueva superestructura política; así, a mediados de septiembre, Morales Bermúdez proclamó la decisión gubernamental de impulsar la llamada propiedad social (empresas de los trabajadores organizados colectivamente) que en la anterior administración fue aprobada por medio del Decreto-Ley 20598, en el que se establecen las bases de su funcionamiento.

En la práctica se dio muy poca importancia a la realización de esta meta de la Revolución; aún más, se afirma

que el círculo que rodeaba al ex Presidente estaba concretamente en contra de este tipo de organización, por lo que evitaba su consecuente aplicación, y en los casos en los que los trabajadores fundaron empresas de este tipo se les saboteó al negárseles el apoyo financiero o mercantil requerido. Actualmente existen 28 empresas de esta clase y se estudian 74 proyectos nuevos.

En este problema político clave respecto al futuro del proceso general, Morales Bermúdez afirmó que ahora se dotará a este sector de los medios políticos, financieros y técnicos, para lo cual anunció el nombramiento con rango de ministro, del civil Angel de las Casas Grieve, como jefe del sector de la propiedad social; "esta medida demuestra que se confiere la máxima prioridad al desarrollo y crecimiento del sector".

Otro aspecto igualmente significativo es el de la futura evolución del sector cooperativo, cuya importancia actual en la economía es alto, ya que de él forma parte el sector productor de azúcar (tercer artículo de exportación peruano) a raíz de la aplicación de la reforma agraria sobre las haciendas de la costa; en este caso, el Presidente recaló haber "constatado la subsistencia de serias deformaciones en el campo cooperativo en el que tendrán que eliminarse los rezagos capitalistas de su estructura para que no sigan generando acumulaciones de carácter empresarial contrarias a los objetivos de la Revolución". Concretamente anticipó que se obligará a las cooperativas a redistribuir sus recursos con sentido social, sin que ello implique su conversión en empresas de propiedad social.

La determinación de hacer avanzar el proceso de cambio en Perú se desarrolla por medio de la nueva política de diálogo público con los grandes núcleos nacionales. El mandatario ha emprendido varias visitas al interior del país en las que se ha reunido con numerosos ciudadanos en jornadas que tienden a la legitimación de su poder y en las que ha expuesto distintas ideas que confirman su interés en apoyarse en las masas para seguir avanzando; para ello se ha recurrido al rescate de la imagen revolucionaria de los héroes nacionales y de intelectuales muy valiosos y casi proscritos del país como José María Mariátegui, fundador del Partido Comunista del Perú. Al mismo tiempo se van definiendo las bases políticas del proceso, cuyo modelo, se ha dicho con insistencia en las últimas

semanas, es el de la "democracia social de amplia participación", concepto éste que intenta concretar la idea de que la Revolución peruana es nacionalista, humanista y cristiana, y su objetivo es, al decir del Presidente, "la creación de una sociedad humanista, socialista y cristiana".

En el discurso conmemorativo del VII aniversario de la Revolución, el 3 de octubre, Francisco Morales Bermúdez señaló que el problema de la participación popular cobraba una nueva dimensión: "Estos cambios, que muchos no perciben, son el resultado de las profundas transformaciones estructurales iniciadas hace siete años... el tiempo transcurrido ha dado origen a que hoy las condiciones sean distintas, porque han surgido nuevos problemas que requieren otro tipo de soluciones... se planteó por todo esto la necesidad de emplear nuevos métodos, de un cambio en el manejo político, el que a través de una mayor apertura hacia el pueblo y de la búsqueda de mayores canales de participación permitiera la solución de esos problemas". Para concretar esa idea anunció que se estudiarán las medidas para transformar la estructura estatal en muchos casos superada para así poder dar fin a la excesiva centralización y crear instrumentos de acción estatal a nivel local, por medio de "núcleos de vecinos participatorios"; esas estructuras, señaló el Presidente, habrán de ir elevando su área de acción hasta llegar al nivel nacional; "la nueva forma de manejo político dará oportunidad a que todos los peruanos puedan actuar dentro del proceso". Estas declaraciones presidenciales permiten observar una clara comprensión de las debilidades políticas del proceso, así como una vaga descripción de la estructura formal del Estado, producto de este fenómeno.

En el campo de la economía nacional, el nuevo gobierno ha decretado, por primera vez en siete años, una devaluación del signo monetario que unificará los dos tipos de cambio: el de exportación, 38.70 soles por dólar, y el de importación, 43.38 soles por dólar, en uno solo de 45 soles por dólar.

La decisión, esperada en los círculos económicos, fue anunciada por el Ministro de Economía y Finanzas el 26 de septiembre último. En su informe, el Ministro declaró que la medida tiende a facilitar el normal desarrollo de la economía y a garantizar la estabilidad del

tipo de cambio. Las causas que obligaron a la devaluación son los efectos de la recesión mundial que ha afectado los precios de las exportaciones peruanas al bajar sus cotizaciones mundiales: cobre, 36%; plomo y plata, 7 y 8 por ciento, respectivamente; se estima que los ingresos por exportaciones mineras disminuirán 11% respecto al año anterior.

Al mismo tiempo que se reducía el valor del principal renglón de exportación —la minería aporta 44.8%—; otros productos también resultaron perjudicados: el precio del café ha declinado 10% y el del algodón 25%. De todas maneras, y de acuerdo con los datos oficiales, se espera que las exportaciones nacionales lleguen a 1 742 millones de dólares (11% más que en 1974).

En las importaciones también se ha dejado sentir con fuerza el proceso inflacionario mundial, ya que las adquisiciones de fertilizantes, alimentos y bienes de equipo y partes, se han elevado notablemente, provocando inflación interna y con ella la falta de competitividad de algunos exportables nacionales. Diversos problemas climatológicos afectaron la agricultura, con lo que disminuyó su ritmo de crecimiento para ser igual al de la población, de tal forma que a pesar de los avances generales en las exportaciones, las importaciones para fines de septiembre último rebasaron los 2 500 millones de dólares.

El Ministro de Economía señaló que la unificación de tipos de cambio permitió que las exportaciones nacionales obtuvieran mayor competitividad y que en el caso de las importaciones, donde la devaluación tendrá un efecto mínimo, se aplicará una política selectiva, que evite las suntuarias, permitiendo sólo las de maquinaria, insumos indispensables y alimentos, con lo que no se afectará el nivel de ocupación ni se desabastecerá el mercado.

Según análisis oficiales, pese a las dificultades inflacionarias de la balanza de pagos y de la producción, el crecimiento del producto interno bruto excederá nuevamente de 5%, sobre todo porque renglones clave, como el de la pesca, han retomado un buen ritmo de actividad; además se considera que la entrada en operación en los próximos años de importantes ampliaciones industriales y mineras, actualmente en construcción, permitirán a Perú remontar algunas dificultades.